

Estado de la Nación y Estado Federal

JUAN LUIS CEBRIÁN

El primer ministro portugués, José Sócrates, declaró recientemente a la prensa que sus prioridades en política exterior se resumían en tres puntos: España, España, España. Alguien comentó entonces que tenía que ser precisamente un visitante extranjero quien viniera a hablar de España a los españoles, enfrascados como estamos en una discusión interminable sobre Cataluña, el País Vasco, Andalucía o Galicia. A partir de esta mañana, el Congreso de los Diputados va a someter a escrutinio formal el balance del primer año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y todo indica que, en gran medida, este debate sobre el estado de la Nación puede convertirse, en realidad, en un debate sobre el estado de las autonomías, o de algunas ellas, y que las discusiones, a veces bizantinas, en torno a la naturaleza metafísica de las patrias o acerca de la identidad de los pueblos darán pie a no poca verbosidad parlamentaria.

La victoria socialista en las elecciones del año pasado significó algo más que una simple alternativa de gobierno, presa éste, por otra parte, de la fragilidad que le confiere su minoría parlamentaria. Se enmarca en un auténtico relevo generacional que, de manera quizás intuitiva pero muy consistente, trata de superar, a un tiempo, la política del consenso de los años ochenta y los impulsos autoritarios a los que sucumbió el PP durante el periodo que su antiguo líder bautizó como la Segunda Transición. En la inicial etapa, los partidos y las fuerzas sociales trabajaron por la reconciliación de las dos Españas, enfrentadas tras un golpe militar que provocó una guerra civil y 40 años de dictadura. Después, la derecha en el poder aspiró a recuperar lo que consideraba, y considera, valores esenciales del ser español, y que van desde un concepto unitario de la patria casi inamovible, a la vertebración católica de la misma. La Transición española contó con la complicidad activa de los países europeos, inmersos en un proceso de unión del continente. La ensoñación aznariana se vio reforzada, en cambio, por el ascenso del fundamentalismo evangelista en los Estados Unidos, y acabó de manera estrepitosa, entre otras cosas, por su impericia a la hora de gestionar la crisis desatada tras

los ataques terroristas de fundamentalistas de otro signo. Son muchas las lecciones que pueden extraerse de estos hechos, pero hay una muy obvia que no deberían olvidar los líderes de opinión, y es que el tiempo pasa para todos. Este país se parece hoy muy poco al que Suárez heredara del franquismo o al que se encontró Felipe González, y en gran medida así por las transformaciones que ellos mismos provocaron. A una realidad nueva conviene también una nueva política. Semejante intuición parece anidar en la gestión del actual Gobierno. Pero, además de la intuición misma, un acertado ejercicio del poder requiere el establecimiento de estrategias claras, capaces de convivir con las políticas a corto plazo sin por eso perder de vista el concepto de lo que se quiere hacer.

Rodríguez Zapatero acostumbra a decir que él es un demócrata. Resulta una declaración superflua, pero él la pronuncia con el convencimiento de quien no ha tenido necesidad de convivir con otras formas de gobierno ni contornear los peligros y amenazas que, tiempo atrás, representaban los famosos poderes fácticos. El simple cumplimiento de su programa electoral es la explicación directa de sus más arriesgadas decisiones. Frente al liderazgo mesiánico de quienes están dispuestos a hacer lo que creen conveniente para el país, aunque los ciudadanos no lo estimen así, él enbala su compromiso con las demandas de quienes le votaron, y trata de cumplir lo que les prometió. Hasta el momento, dicha actitud ha rendido sus frutos, pero también ha despistado a algunos

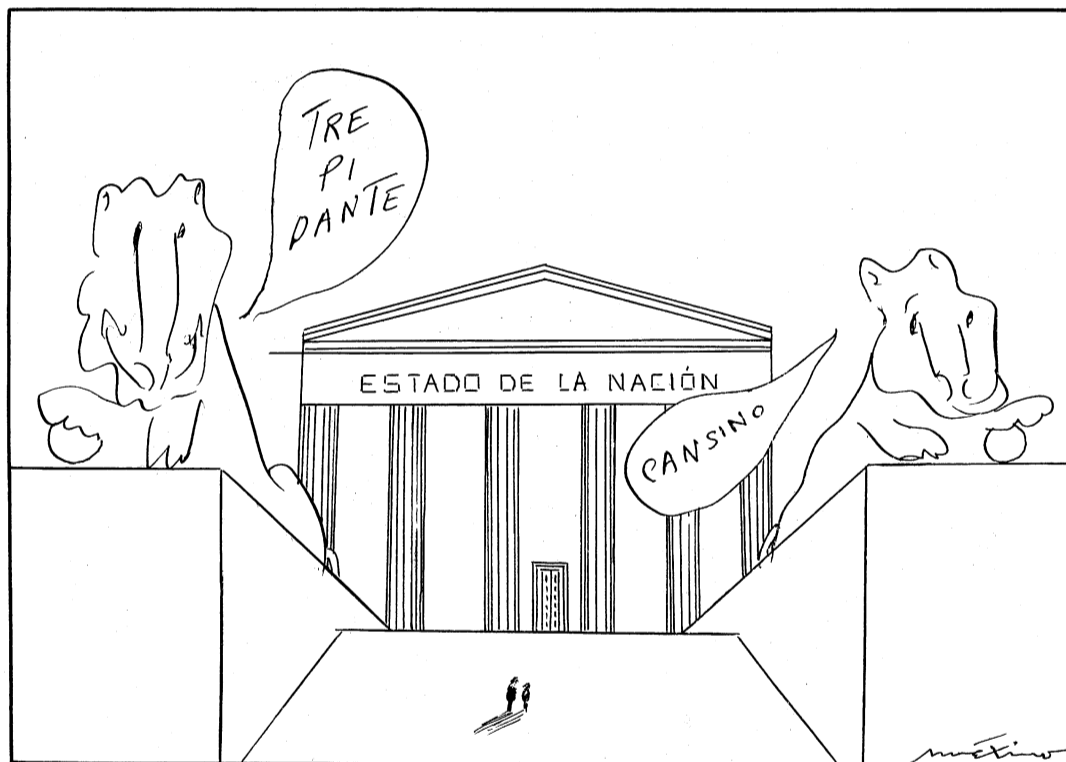
centros tradicionales de poder, que aspiran a ser reconocidos y se sienten ninguneados o poco escuchados. Naturalmente que en el desarrollo de esa dialéctica tan elemental como justa (hago esto o lo otro porque me eligieron para ello) a veces el Gobierno se comporta con maquiavélico angelismo, olvidando que las fuerzas en presencia, parlamentarias o no, conservan una capacidad considerable a la hora de organizar la resistencia frente al cambio. De modo que entre los excesos de este Gabinete está el haberse abierto muchos frentes de batalla a la vez. Es preocupante la escasa habilidad desplegada en la búsqueda de un acuerdo con la Iglesia católica o la Casa Blanca, y la política audiovisual ha logrado la irritación de casi todo el mundo que tiene que ver con ella, a co-

menzar por los espectadores, que no ven disminuir las toneladas de basura y de inmundicia mediática con que los empleados del señor Berlusconi inundan a diario las pantallas. Pero se ha impulsado el ejercicio de los derechos civiles, la economía marcha viento en popa, entre otras cosas gracias a los inmigrantes, y, frente al cacareado equilibrio fiscal de los populares, este Gobierno cerrará el año con superávit y creciendo por encima del 3%, aunque sea incapaz de comunicarlo con la brillante eficacia con que Rodrigo Rato anunciaba sus éxitos. De modo que poco o nada tiene que temer cara al futuro próximo, sobre todo si la oposición sigue enrocada en su indigestión de la derrota electoral y su balbuceo autoritario. Nada, salvo una cosa: que el enredo de las autonomías sea tan grande que acabe enfrentando a los socialistas entre sí y desorientando a su electorado. Eso lo han visto muy bien Rajoy y sus columnistas de alcoba, empeñados en castigar el hígado de Zapatero a base de puñetazos dialécticos con los que dicen querer evitar la disolución de España a manos del tripartito catalán.

La gran asignatura pendiente de Rodríguez Zapatero, cuyo simple aprobado puede elevarle a las alturas de estadista, superando su actual consideración de político eficaz, es la reordenación de lo que se llama la cuestión territorial y que se refiere, más bien, a la reforma de la estructura del Estado. La ciencia política ha gastado toneladas de tinta a la hora de hacernos comprender la distinción entre la libertad de los ciudadanos, considerada como un derecho individual, y la libertad de las naciones, que es un bien colectivo, perteneciente a determinados grupos deseosos de verse reconocidos en su identidad. El derecho al sufragio y los valores clásicos de la democracia tienen que ver con la libertad de los individuos, pero la libertad de las naciones deposita sus prioridades en cuestiones como la autodeterminación o la existencia de símbolos propios que les identifiquen. En la habilidad para combinar ambas instancias ha residido, durante siglos, la pujanza de las democracias occidentales, capaces de representar a un tiempo la voluntad colectiva de los pueblos y la defensa de los derechos de sus ciudadanos.

Pasa a la **página siguiente**

MÁXIMO



CARTAS

AL DIRECTOR

Los textos destinados a esta sección no deben exceder de 30 líneas mecanografiadas. Es imprescindible que estén firmados y que conste el domicilio, teléfono y número de DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones, así como de resumirlas o extractarlas. No se devolverán los originales no solicitados, ni se dará información sobre ellos. Correo electrónico: CartasDirector@elpais.es. Una selección más amplia de cartas puede encontrarse en: www.elpais.es

¿Espíritu deportivo?

Contemplo atónita la desoladora fotografía de la caída del ciclista López de Munain en el Giro. Su cuerpo, como el de una marioneta rota, yace inconsciente tras golpearse contra el quitamiedos. Sus "compa-

ñeros" del Giro pasan pedaleando junto a él sin ni siquiera volver la cabeza. No imagino una situación semejante en ningún otro "equipo"; una oficina, una cafetería, ni siquiera en un examen de oposiciones (lo sé porque fui testigo de un desmayo en uno de mis exámenes). ¿A qué se refieren los deportistas cuando hablan del tan sonado "espíritu deportivo"? Yo, hoy, tras ver esa foto, me alegro profundamente de no tenerlo. — **Victoria Casas Hereu**. Madrid.

Regularización y efecto llamada

En contra de los alarmismos de algunos, el proceso de regularización de inmigrantes sin papeles con contrato de trabajo que finalizó el pasado sábado no supone un efecto llamada. Más bien, en comparación con los efectos de la política de inmigración del anterior Gobierno,

se podría deducir lo contrario. La anterior política suponía que cientos de miles de inmigrantes irregulares que ya estaban en nuestro territorio no tenían posibilidad alguna de normalizar su situación. Esto llevaba a la mayoría a aceptar cualquier oferta de trabajo, sin importar las condiciones y sin posibilidad de exigir ningún derecho laboral. Cualquier trabajo era mejor que ninguno y por ello la indignidad de esta situación no frenaba la llegada de forma ilegal de inmigrantes. Más bien al contrario, dados los escasos medios de inspección de la Administración, la situación irregular hacía apetecible su contratación por disminuir los costes laborales y permitir evitar las restricciones de la regulación laboral.

Los inmigrantes irregulares tenían cierta ventaja comparativa (abhorrecible desde el punto de vista de los derechos humanos), viéndose perjudicados los inmigrantes ya regulares y los

trabajadores nacionales. Muchas empresas demandaban trabajadores sin papeles, porque eso les permitía reducir costes o por inercia de lo que sus competidores ya estaban haciendo.

En algunos sectores, la contratación de inmigrantes irregulares estaba tan extendida que su persecución era muy costosa e injusta. ¿Cómo iniciar un proceso sancionador contra un empresario por tener contratados inmigrantes irregulares cuando todos los empresarios de su sector estaban haciendo lo mismo? La única manera de luchar contra un fenómeno de estas características es permitir un periodo voluntario de retorno a la legalidad acompañado de una posterior inspección exhaustiva.

En contraste, el proceso de regularización, que devolverá la dignidad a muchos ciudadanos inmigrantes en nuestro país, a corto plazo puede tener efectos negativos para muchos de ellos. Por un lado, los inmigrantes que pasen a estar regularizados

perderán esa indeseable ventaja comparativa y tendrán que competir en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Por otro lado, si se produce efectivamente un control serio y con medios de inspección adecuados contra la contratación ilegal, los inmigrantes que no hayan logrado la regularización van a encontrar muchas más dificultades en encontrar trabajo que hasta ahora. Disminuir las posibilidades de trabajo irregular es precisamente lo contrario a un efecto llamada.

En cualquier caso, cualquier política que no ataque de raíz la pobreza de los países en vías de desarrollo no podrá tener un efecto relevante en el control de la inmigración. — **Rosa Ferrer Zarzuela**. Barcelona.

Sequía

En el editorial de EL PAÍS del 2 de mayo de 2005 se describen los

Pasa a la **página siguiente**

Los chiíes y el ejemplo iraquí

IAN BREMMER

Cuando la Casa Blanca ordenó la operación militar que derrocó el Gobierno de Sadam Husein, creía y esperaba que la invasión serviría como *efecto ejemplificador*. Estados Unidos enseñaría al mundo que está dispuesto a impedir por cualquier medio que sea necesario que los dictadores desarrollen armas de destrucción masiva. Las elecciones democráticas en Irak demostrarían que los ciudadanos árabes quieren efectivamente libertad política y gobiernos representativos. Es muy posible que la caída de Sadam sirva de ejemplo, sólo que no en la forma que Washington tenía en mente. El pasado 30 de enero, 8,5 millones de iraquíes acudieron a las urnas para elegir diputados para una Asamblea de transición de 275 miembros y 18 consejos de gobierno provinciales. La Alianza Iraquí Unida, una lista electoral compuesta principalmente por candidatos chiíes, respaldada por el líder espiritual chií, el gran ayatolá Alí al Sistani, obtuvo más de la mitad de los escaños de la Asamblea. El resultado no fue ninguna sorpresa, dado que los chiíes suponen el 60% de la población iraquí. Pero sí marca un hito en la historia de Irak. Una nación políticamente dominada por la minoría suní desde su nacimiento como nación moderna, está ahora decidida a convertirse en el primer Gobierno árabe chií de la historia moderna.

Irak es una de las cuatro únicas naciones —con Irán, Bahrein y Azerbaiyán— en las que los musulmanes chiíes son mayoría. Los chiíes de Irak superan tres a uno en número a los suníes y saborean la oportunidad de ejercer por fin el poder en Bagdad. Por tanto, el verdadero *efecto ejemplificador* en Irak podría no tener nada que ver con la voluntad política estadounidense ni con la democracia representativa y sí mucho que ver con una demostración de poder chií en un Estado árabe. Esto podría suponer un peligro para la estabilidad en todo Oriente Próximo y una nueva tanda de problemas para Washington. Los chiíes de otros países, sobre todo los de Bahrein y Arabia Saudí, estratégicamente importantes, están siguiendo muy de cerca los acontecimientos políticos en Irak. Las tensiones entre suníes y chiíes son una cuestión perenne en Bahrein, donde una minoría suní domina el Gobierno y las estructuras económicas. El apoyo —y posiblemente ayuda material— a la discriminada y movilizadora población chií de Bahrein por parte de un nuevo Gobierno chií en Irak podría provocar allí violencia política y agitación social. Los chiíes de Arabia Saudí, entre un 10% y un 15% de la población del reino, también observan atentamente los acontecimientos en Irak. En vísperas de la ronda más reciente de elecciones municipales en Arabia Saudí, en las que se esperaba que los chiíes obtuviesen varios escaños, un ingeniero chií saudí dijo a *The New York Times*: “A lo mejor ahora, después de todo lo que ha pasado en Irak, sacamos algo políticamente de la historia de Husein. Ahora la cuestión [de los de-

rechos chiíes en Arabia Saudí] tomará otro rumbo, porque los chiíes han empezado a desarrollar su cultura política”. Las recientes manifestaciones chiíes, las más numerosas en muchos años en el reino, hacen pensar que esta impresión está muy extendida. Los chiíes de la región no son los únicos interesados en los acontecimientos que tienen lugar en Bagdad; los gobiernos suníes también están atentos y es muy probable que actúen con decisión para trancar cualquier intentona del nuevo Gobierno iraquí de inflamar las ambiciones de sus minorías chiíes. Las autoridades saudíes han vigilado estrechamente a los chiíes del reino, especialmente en los años transcurridos desde la revolución islámica en Irán, y han restringido drásticamente su libertad para organizarse y para rendir culto abiertamente. Si los chiíes obtienen buenos resultados en las elecciones municipales saudíes y se sienten envanecidos por el nuevo Gobierno chií en Bagdad para exigir mayores libertades religiosas y derechos políticos, podrían provocar una violenta reacción que desencadene un círculo vicioso de violencia. Es mucho lo que está en juego, especialmente para la familia real saudí —y para EE UU—, dado que la población saudí chií está concentrada en áreas que están directamente sobre algunos de los campos petrolíferos más

ricos del reino. Muchos saudíes wahabíes reniegan de los chiíes por infieles, menos dignos de respeto incluso que los cristianos o los judíos. La hostilidad es mutua.

Un Gobierno chií en Irak puede ser también una buena noticia para los chiíes de Líbano, muchos de los cuales se sienten especialmente asediados tras los recientes acontecimientos que amenazan con disminuir la influencia directa de Siria en la política libanesa. Si Bagdad decide unirse a Irán en apoyo de los chiíes libaneses, el país podría verse de nuevo desgarrado por la violencia sectaria. De hecho, el nuevo Gobierno chií de Irak podría hallar ventajas estratégicas en una alianza política tanto con Irán como con Siria. La perspectiva de un régimen amistoso en Bagdad es especialmente grata en Teherán, cuya guerra con Sadam Husein se cobró millones de vidas en los años ochenta. Irán y Siria, que llevan años coordinando su estrategia regional a través de Hezbolá, han hecho frente común en las últimas semanas para encontrar formas de aliviar las fuertes presiones que ambos sufren por parte de Washington. Si concentran su influencia, Irak, Irán y Siria podrían constituir un bloque impresionante en una región dominada por los suníes.

Todo esto podría tener su lado bueno para Estados Unidos.

Todo esto podría tener su lado bueno para Estados Unidos.

Todo esto podría tener su lado bueno para Estados Unidos.

Una mayor influencia chií en toda la región podría volver más pragmáticos a algunos de los grupos chiíes más radicales. Hezbolá, por ejemplo, podría sentirse más libre para perseguir sus objetivos a través de la política convencional (el grupo tiene ya una docena de escaños en el Parlamento libanés). Del mismo modo que los pacificadores en Irlanda han intentado separar el Sinn Féin del IRA, los moderados de la región podrían animar a la cúpula política y social de Hezbolá a distanciarse del ala militante del grupo. Un acontecimiento así podría suavizar las tensiones entre Siria, Líbano e Israel, un desenlace positivo para cualquier iniciativa estadounidense encaminada a ampliar el proceso de paz de Oriente Próximo. Desgraciadamente, es más probable el desenlace opuesto. La oportunidad para los chiíes de ejercer su fuerza política en la región posiblemente les anime a adoptar una línea más dura contra Israel y a exigir más derechos para las minorías chiíes en los países dominados por los suníes. Una alianza entre Irak, Irán y Siria seguramente aspirará a tener su propio *efecto ejemplificador*: que los chiíes del mundo árabe están dispuestos a utilizar su nuevo poder para desestabilizar gobiernos suníes y para adoptar un programa más basado en la ideología. Cualquiera sabe en qué podría desembocar esto.

Ian Bremmer es presidente de Eurasia Group, empresa de investigación y consulta financiera. Es miembro del World Policy Institute y columnista para el *Financial Times*.

Traducción de News Clips.

© Tribune Media Services, 2005.

Viene de la **página anterior**

Los movimientos nacionalistas que pugnan por el reconocimiento de su particular identidad en el seno de la comunidad estatal aseguran que sus pueblos se ven discriminados o perjudicados por otros más poderosos, por lo que la proclamada igualdad de los ciudadanos ante la ley no sería tal. De otra parte, la creciente debilidad del Estado-nación, desbordado por la globalización, ha conducido a ampliar los espacios políticos, un fenómeno cuyo ejemplo más obvio es de la Unión Europea. En ésta conviven Estados grandes y pequeños, pobres y ricos, con diferencias a veces inmensas entre ellos. Los ciudadanos de todos esos países gozan, en principio, de las mismas libertades individuales. Su democracia es de igual calidad. Pero sus identidades, y sus necesidades, son distintas. La única forma de solventar la aparente contradicción entre la libertad a que son acreedores en tanto que ciudadanos y el reconocimiento del derecho al autogobierno que reclaman como pueblos reside en el experimento

Estado de la Nación y Estado Federal

más exitoso de cuantos la práctica política ha llevado a cabo a lo largo de la historia: el método federal.

Esto, que antes o después ha de valer para Europa, debería servir también para nuestro país. La aversión al federalismo de la derecha española tiene que ver con las raíces de la concepción de la unidad de la patria en torno a la Corona y al catolicismo, y también con un cierto sentimiento jacobino de nuestros liberales e izquierdistas. Dado que el modelo federal era repudiado por las Fuerzas Armadas y propiciaba evocaciones del republicanismo, los redactores de la Constitución del 78 evitaron esa fórmula y se adentraron en la mucho más confusa del Estado de las autonomías. Éste trataba de solventar las reivindicaciones de las regiones históricas sin

establecer agravios comparativos con otras partes de España ni levantar suspicacias castrenses frente al separatismo. El resultado, un cuarto de siglo después, es más que apreciable. La descentralización administrativa ha generado un progreso considerable en las zonas deprimidas del país, ha potenciado ciudades y comarcas y ha hecho disminuir los desequilibrios de renta entre unas regiones y otras. Pero, paradójicamente, no ha servido para resolver los dos principales focos de tensión relacionados con el tema: la situación en Cataluña y el País Vasco. Al mismo tiempo, sin embargo, y debido a las características de la Ley Electoral, ha otorgado a las minorías nacionalistas un protagonismo en la vida política española que no se corresponde con el peso de su representación popular.

Hace ya más de veinte años que le oí al profesor Dahrendorf, durante un encuentro en la Fundación March, que un modelo autonómico que no define claramente las competencias respectivas del Gobierno y Parlamento

centrales y las de las autonomías está condenado a un permanente proceso de negociación, por lo que conlleva una considerable inestabilidad política. Algo así venimos padeciendo hace más de dos décadas, aunque la situación es cambiante en función del peso electoral del partido del Gobierno y de las ayudas ocasionales que le puedan prestar las formaciones nacionalistas. Rodríguez Zapatero ha anunciado una reforma constitucional y una revisión generalizada de los estatutos autonómicos que permitan progresar y profundizar en el concepto de la España plural. Ése es un enunciado literario, pero no jurídico ni político. El problema que hoy tenemos sobre la mesa no es el de la definición de España, ni tampoco el de cuestionarnos sobre el ser de Cataluña o el País Vasco, sino el modelo de Estado que permita a los 44 millones de ciudadanos que viven en él (de los que un 10% son emigrantes) disfrutar de sus derechos y ejercer sus responsabilidades.

Una definición clara de las atribuciones y funcionamiento

del poder central y los autonómicos, sea en el terreno de la justicia, en el impositivo o en cualquier otro aspecto de la organización de la vida colectiva, es hoy requisito indispensable para continuar adelante con el proyecto de convivencia democrática de los españoles y, también, con la integración europea en el marco de la globalización. El Gobierno debe recuperar la iniciativa en este tema. No basta con responder con mayor o menor acierto al *plan Ibarretxe* o al *plan Maragall*. Los presidentes autonómicos tienen toda la legitimidad del mundo para hacer sus propuestas, pero no pueden arrogarse el establecimiento unilateral de la agenda política en una especie de tira y afloja en defensa de sus exclusivos intereses. Puesto que es, antes que nada y sobre todo, un demócrata, al presidente Rodríguez Zapatero le corresponde la tarea de promover un debate en el que se pierda de una vez por todas el miedo a las palabras y se aborde directa y llanamente, con todas sus consecuencias, la cuestión del Estado Federal.

CARTAS

AL DIRECTOR

Viene de la **página anterior**

efectos de la sequía en la agricultura y se recomiendan “normas mucho más estrictas en el consumo doméstico del agua” para resolver la escasez del recurso. Con independencia de la utilidad de ahorrar agua en las ciudades, resultaría mu-

cho más importante promover un menor consumo en la agricultura, ya que esta actividad acapara el 80% del agua en España. Así, por poner un ejemplo, el olivar —uno de los cultivos de secano más tradicionales— es actualmente el que más agua consume en el Guadalquivir. El Ministerio de Agricultura debería influir en la reforma de la PAC para que los cultivos de secano perciban las mismas subvenciones que los de regadío, así

como limitar el crecimiento de nuevos regadíos, muchas veces ilegales. También se puede ahorrar hasta un 30% del agua consumida en el riego por goteo con los nuevos sistemas de riego inteligente, que incorporan tecnologías con sensores que miden, minuto a minuto, la humedad en el suelo, la atmósfera y la planta, y así poder determinar las necesidades reales de riego.— **Juan Carlos del Olmo**, secretario general de WWF/Adena.

Fe de errores

En la información del sondeo sobre las elecciones gallegas, publicada el pasado día 8, se decía que el apoyo al Bloque Nacionalista Galego descendiende 12 puntos porcentuales cuando en la realidad baja 6,1 puntos.

El avión que la noche del lunes realizó con éxito un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de El Cairo, con 150 turistas españoles a bordo, pertenece a Spanair, y no a Iberia, como informaron en un primer momento portavoces del aeródromo a la agencia Efe.